



URVIO, Revista Latinoamericana de  
Estudios de Seguridad

ISSN: 1390-3691

revistaurvio@flacso.edu.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias  
Sociales  
Ecuador

Brites, Walter Fernando

La emergencia del problema delincriminal en un conjunto habitacional de población  
relocalizada

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 8, septiembre, 2009,  
pp. 107-115

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  
Quito, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552656557009>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

# La emergencia del problema delincuencial en un conjunto habitacional de población relocalizada

## *The emergence of delinquency problem in a housing of relocated population*

■ Walter Fernando Brites<sup>1</sup>

**Fecha de recepción:** junio 2009

**Fecha de aceptación y versión final:** septiembre 2009

### Resumen

El propósito de este artículo es analizar la conformación de escenarios de gestión asociada, Gobierno/ciudadanía, a fin de solucionar, entre otros problemas, la inseguridad en un conjunto habitacional de población relocalizada, en la ciudad de Posadas (Argentina). El análisis gira en torno a los problemas delictivos desencadenados por crecientes situaciones de marginalidad, y los intentos de solución a partir de las mesas interactorales entre vecinos del barrio y actores gubernamentales.

**Palabras claves:** inseguridad, vandalismo, gestión asociada, gobierno, participación vecinal.

### Abstract

The purpose of this paper is to analyze the conformation of associated management scenarios, government/citizenship to solve, among other problems, insecurity in a housing complex for relocated population in the city of Posadas (Argentina). The analysis focuses on the growing crime problems generated by situations of marginality and the attempts at settlement between neighborhood residents and government actors.

**Keywords:** insecurity, vandalism, associated management, government, neighborhood participation

---

<sup>1</sup> Licenciado en Antropología Social y magíster en Políticas Sociales. Docente e investigador en la Universidad de la Cuenca del Plata y en la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Doctorando en el Programa de Post-grado en Antropología Social. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). E-mail: briteswalter@yahoo.com.ar

## Introducción

**D**esde un abordaje descriptivo, este trabajo recoge resultados preliminares de mi investigación doctoral en curso sobre participación ciudadana y problemas urbanos en la ciudad de Posadas, Argentina, ubicada a orillas del río Paraná, frente a la ciudad paraguaya de Encarnación. Posadas ha funcionado desde 1878 como capital de la provincia de Misiones, constituyéndose en centro administrativo, comercial y de servicios para una provincia cuya economía se basa fundamentalmente en la producción agropecuaria y agroindustrial.

En las últimas décadas, con 290.000 habitantes, la ciudad se ha transformado en uno de los núcleos urbanos (de tamaño medio) más importante de la región. Las transformaciones generadas pueden ser atribuidas a tres fuentes principales: a) un crecimiento demográfico acelerado por el flujo migratorio de población rural, debido a la prolongada crisis del sector agrario, b) el vertiginoso crecimiento y expansión de la trama urbana; y c) el impacto generado por la represa de Yacyretá, los programas de desarrollo urbano y relocalización.

De manera específica, el proyecto hidroeléctrico Yacyretá ha impuesto una impronta particular sobre el espacio urbano de Posadas, al contribuir al inédito proceso de segregación. La amplia distancia (entre 10 y 15 km.) que separa a los conjuntos habitacionales de población relocalizada, con respecto a las áreas céntricas de la ciudad, es uno de los impactos negativos. El acceso al mercado de trabajo urbano requiere el pago del transporte, además, en los nuevos barrios hay deficiencias de infraestructura y servicios, así como problemas vinculados a la marginalidad y la delincuencia.

Apelando al análisis de un *caso testigo* nos centraremos en el conjunto habita-

cional A-4, localizado en las afueras de Posadas. Sus orígenes datan del año 1998, cuando, a partir de sucesivos programas de relocalización, comenzó el gradual traslado de familias de las zonas de afectación del embalse (la costa ribereña y arroyos urbanos). El proceso de poblamiento del conjunto habitacional finaliza hacia el año 2004, al construirse más de 1.600 viviendas. Actualmente, ese conglomerado alberga a una población pobre, cercana a los 10.000 habitantes.

Desde su habilitación, A-4 ha expresado problemas referidos al habitar (carencias de bienes y servicios de consumo colectivo), pero fundamentalmente problemas de índole específica; aquellos referidos al vandalismo, la inseguridad y la estigmatización en magnitudes, antes no alcanzada por la población relocalizada. En ese marco, ha emergido cierto malestar vecinal y acciones colectivas de solución a partir de las mesas interactorales.

Las mesas interactorales de gestión asociada establecen un escenario público de deliberación que convoca periódicamente a vecinos y actores del gobierno local, a fin de planificar acciones que contribuyan a solucionar los problemas del barrio. A través de estos espacios de gestión, no sólo se han encontrado diversas soluciones, sino que se han instalado mecanismos que posibilitan nuevas prácticas participativas a escala barrial. El modelo de relaciones intersectoriales que habilita las mesas, crea una esfera pública, participativa y deliberativa, entre actores con poderes y saberes diferenciados, para generar ámbitos de gestión que, al involucrar cierto protagonismo vecinal, pretenden ser más democratizantes.

Acceder al conocimiento de este escenario implicó la realización de un prolongado trabajo de campo, durante los años 2007 y 2008, en donde se asistió periódicamente a las mesas interactorales. La elaboración del diseño de investigación partió de un conjunto mínimo de hipótesis explora-

torias, y eligió el método etnográfico como el camino más idóneo para relevar la complejidad y variabilidad de la problemática. La especificidad del fenómeno analizado implicó el uso intensivo de técnicas de recolección cualitativas, que posibilitaron el diálogo y la comunicación con informantes.

Instalado el problema delincriminal en las mesas, y los intentos colectivos por resolverlos, nos interrogamos: ¿quiénes participan?, ¿desde dónde participan?, ¿cómo se participa y delibera?, ¿cuáles son los resultados alcanzados?, etc. Estas son algunas de las preguntas que orientaron nuestra investigación y cuyos resultados recogemos en este artículo.

### **El conjunto habitacional A-4 y la secuela de la relocalización**

El conjunto A-4, también denominado por sus habitantes barrio “La Nueva Esperanza”, ha sido el resultado de sucesivos programas de relocalización efectuados por la Entidad Binacional Yaciretá (EBY)<sup>2</sup>. El conjunto habitacional se extiende sobre un espacio de 80 manzanas, ocupando un área caracterizada como periférica, por su localización extremadamente distanciada de la ciudad. Una zona de abundante vegetación; típico paisaje de campo.

Desde el inicio de las relocalizaciones, las unidades habitacionales entregadas fueron de “tipo económica”. Su diseño, muy simplista optó por construir viviendas apelando a necesidades cuantitativas y, un precario tratamiento de los componentes del hábitat. Así, a partir de la habilitación de la primera etapa del barrio, el proceso de relocalización evidenció que la asignación de las nuevas viviendas no brindó la anhelada y programada solución habitacional (que justificó la relocalización). Ello, conjuntamente con el tratamiento muy precario de

los espacios colectivos, derivó en los primeros reclamos.

Conforme avanzó el proceso de relocalización, el barrio comenzó a experimentar déficit y variados problemas: pobreza, desempleo, aislamiento socio-territorial, vandalismo, carencias de servicios e infraestructura, etc. Muchas de estas situaciones, a pesar de las que acarrea el propio proceso de relocalización, refirieron a manifestaciones de la segregación socio-espacial. En otras palabras, se trata de hogares cuyas formas de vida se encontraron más desestructuradas que antes del traslado, con peores condiciones para alcanzar la sobrevivencia mínima.

El primer impacto perceptible de la relocalización tuvo que ver con la vulnerabilidad socio-espacial que impuso el traslado de un área urbana más compactada y unificada, hacia otra más aislada. El nuevo barrio, muy distante de las zonas urbanizadas de la ciudad, fracturó las redes sociales comunitarias, cruciales para la subsistencia, e impuso gastos en transporte y amplias distancias, llegando a afectar las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo urbano. La fractura de estas redes sociales, muchas veces funcionales para el acceso al trabajo, puso de relieve el proceso de desafiliación social (Castel; 2000); por el que atravesaron los hogares.

El segundo impacto tiene que ver con la calidad del hábitat en donde se ven obligados a residir, y los problemas que en él emergen. El barrio para realojar a familias relocalizadas fue pensado inicialmente como un barrio-vivienda, olvidando que la vivienda es sólo un componente del hábitat. La carencia de las mínimas dotaciones de servicios urbanos básicos, como agua potable, alumbrado público, escuelas, centros de salud, transporte, equipamiento comunitario, áreas recreativas, etc., derivó en innumerables demandas con respuestas parciales y cortoplacista. Aunque la EBY fue el principal responsable del barrio, la inter-

2 La entidad fue creada en el año 1973 entre Argentina y Paraguay.

vención complementaria de otras esferas del gobierno provincial y municipal se articuló a la población local a partir de la emergencia de demandas específicas.

Al redimensionar la importancia del entorno, muchos pobladores pudieron tomar conciencia de que la relocalización en un nuevo barrio era más que la simple casa, un bien, previamente muy valorado. Sin embargo, fue a partir de la vivencia cotidiana en el barrio, en que muchos vecinos interpretaron los problemas colectivos que desata un conjunto habitacional asentado en un área periférica y sin hábitat urbano. Un espacio en donde, por cierto, la segregación afecta los estándares de la calidad de vida.

El conjunto de adversidades del nuevo lugar de residencia generó excesos de incertidumbres y una “cultura del riesgo” con incidencia en la denominada *inseguridad social* (Castel 2004: 45). En el barrio, las fuertes tasas de desempleo, empleos precarios y de actividades marginales, así como la degradación del hábitat, los delitos y drogas son factores causantes de inseguridad.

La lejanía, la exclusión, la dificultad de movilidad espacial y social, contribuyó al aislamiento del barrio y a la territorialización de prácticas en espacios sociales cada vez más homogéneos. Las manifestaciones de este proceso derivaron en la emergencia de prácticas ilegales, hurto, comercialización clandestina, drogas, etc. El vandalismo juvenil y la inseguridad caracterizaron de manera emblemática al nuevo lugar de residencia, emergiendo valoraciones negativas hacia el conjunto habitacional.

Antes de la relocalización, los vecinos no padecían el problema de la inseguridad por delitos. El conocimiento local y el singular ordenamiento de las casas, unida a una fuerte tradición comunitaria facilitaban la vigilancia vecinal. Ese esquema se resquebraja en un conjunto habitacional de grandes dimensiones, donde moradores provenientes de otros asentamientos

son muchas veces desconocidos (Informe PARR, 1999)<sup>3</sup>.

Como contrapartida a los efectos de la exclusión han aflorado diversas estrategias de subsistencias a veces vinculadas a prácticas ilegales y delictivas, como una alternativa de obtención de satisfactores; contexto en que el delito es visto como el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales (Wacquant, 2000: 18). No obstante, vale aclarar que la violencia que se genera a partir de estas estrategias de supervivencia es bastante difusa, no llega al extremo del homicidio como motivo principal, su organización delincuencial es precaria, (Carrión; 2002: 39). Puede afirmarse que la marginalidad generalizada estimuló el desarrollo de una economía ilegal, caracterizada por la comercialización de sexo, objetos robados y variadas drogas. El barrio de relocalizados fue visualizado como un lugar inseguro, un espacio habilitado para delinquir.

Estas situaciones incidieron en que los relocalizados comenzaran a ser percibidos por la sociedad local como peligrosos, y sus condiciones de pobreza como el resultado de vicios y patologías personales. En la medida en que el área se fue caracterizando de insegura, no sólo se criminalizó la pobreza, sino que en sus límites se incrementó la vigilancia policial.

Más allá de la visión estigmatizada de la población relocalizada, el vandalismo es un hecho real y vivenciado a diario en el barrio. Con frecuencia sus habitantes reclaman sobre hechos delictivos; además es común el relato sobre golpizas que protagonizan los jóvenes. A juicio de los vecinos, las drogas, el alcohol y el actuar de bandas explican la violencia del barrio y, aunque se han denunciado casos de robos y venta de drogas, la

3 Programa de Acción para el Reasentamiento y Rehabilitación (PARR). Monitoreo convenio Universidad Nacional de Misiones-Entidad Binacional Yacyretá. Sector Urbano informe n° 3. Enero de 1999.

existencia de represalias han vuelto temerosos a muchos vecinos.

En este contexto comenzaron a surgir los primeros cuestionamientos vecinales para frenar la ola delictiva hacia el interior del barrio. Ello implicó un proceso colectivo que al definir la situación como “injusta” proporciona justificaciones para la acción (Berrío Puerta; 2006). Así, el malestar generalizado reclamó políticas de seguridad y, hacia mediados del año 2004, el problema fue instalado en las mesas interactorales del barrio.

### **Las mesas interactorales de gestión asociada**

En el marco de una coyuntura democrática y socio-política abierta al involucramiento y participación de la sociedad civil en las políticas, los gobiernos locales han instalado escenarios de proximidad al ciudadano. Uno de esos escenarios son los procesos de gestión asociada que dejan márgenes de oportunidades a la participación local y vecinal. La gestión asociada, al posibilitar prácticas intersectoriales (gobierno/ciudadanía), construye redes mixtas socio-gubernamentales para la resolución de problemas comunitarios (Poggiese et, al; 1999).

En la actualidad se pueden diferenciar variados modelos de participación, desde las propuestas tecnocráticas de “participación desde arriba”, corrientemente identificados con los modelos de participación formal o funcional, en el que el Gobierno pone límites a la participación, guiándola en dirección al clientelismo y la gobernabilidad<sup>4</sup>, hasta modelos más abiertos de participación, cuyo eje es el ciudadano, modelo permeable a la ampliación de procesos deliberativos y de tomas de decisiones

de actores y organizaciones socio-comunitarias. Desde esta perspectiva, Villasante (1997: 15) sostiene que “la participación no es simple información ni consultas de opiniones, sino tomas de decisiones compartidas luego de un proceso de negociación”.

El modelo de gestión asociada apunta a instalar la *participación real* de los ciudadanos, en procesos decisorios de orden democráticos. Es por ello que el escenario de gestión constituye un espacio abierto, donde se reconocen a *todos* los sectores sociales involucrados en una variedad de formas asociativas, y en la que todos están habilitados para participar, organizar y decidir, porque fundamentalmente *todos* tienen algo para enseñar y aprender en el proceso de gestión.

En el caso del conjunto habitacional A-4, las experiencias de gestión asociada se materializaron a través de la mesa interactoral barrial. Su objetivo fue “promover un espacio de articulación inter-actoral participativo y democrático para la resolución de los problemas comunitarios”<sup>5</sup>. A pesar de ser una propuesta del sector gubernamental, la mesa fue progresivamente desarrollada a partir del protagonismo vecinal<sup>6</sup>.

La modalidad de trabajo en la mesa interactoral, en tanto escenario asociativo de gestión, trató de estar abierta al desarrollo de prácticas horizontales. En ese sentido, las mesas se han llevado a cabo de manera pautada, a partir de encuentros periódicos, funcionando a modo de taller o espacio/reunión abierto al planteamiento de propuestas e ideas, con reglas claras y explícitas, que propicien la articulación

5 Boletín de la mesa interactoral. Oficina de Participación Barrial de la EBY. Conjunto A-4. marzo de 2007.

6 En el proceso de constitución de la mesa interactoral, el equipo técnico del ente responsable de la relocalización (EBY) ha desarrollado actividades de convocatoria y promoción entre vecinos y otros actores.

4 La idea de participación desde esta perspectiva sería un mecanismo de control, dirigido a organizar más eficientes y mejor estructurados sistemas de gobernabilidad.

de todos los actores con voluntad política, para abordar problemas que se pretenden solucionar.

A través de las mesas, vecinos, líderes comunitarios, funcionarios de la municipalidad, técnicos de diversos ministerios (salud, educación), enfermeros y maestros del barrio, policías, personal de la EBY, entre otros, comenzaron de manera inédita las primeras experiencias de gestión conjunta. Constituido ese espacio, los vecinos plantearon problemas referidos al vandalismo juvenil, la falta de atención socio-comunitaria, el cuidado del medio ambiente, carencia de infraestructura y servicios públicos etc.

El lugar escogido para la celebración de las mesas fue el espacio de los Salones de Usos Múltiples (SUM), espacios que funcionan como centros de sociabilidad local. Así, con el argumento de otorgar mayor participación a los vecinos, se propuso una modalidad periódicamente rotativa de las mesas por diferentes SUM del conjunto habitacional. Situación que puede interpretarse como un proceso de involucramiento y apropiación vecinal del espacio de deliberación conformado.

De la multiplicidad de problemas que afectaron a la población local, la violencia delincuencia y la inseguridad acapararon la atención colectiva de los vecinos. Los reiterados hechos de vandalismo en las escuelas, la drogadicción y los robos nocturnos en el barrio llevaron a plantear estos problemas en la mesas interactorales, hasta el punto en que los vecinos propusieron habilitar de manera específica una *mesa de seguridad*.

En un primer momento, las ideas que motorizaron esta propuesta sugirieron que los problemas vandálicos del barrio podían encontrar su tratamiento y resolución a partir del involucramiento y participación de la policía en las mesas, a fin de diseñar un modelo de vigilancia con participación vecinal. En las siguientes reuniones de las mesas, comisarios y oficiales estuvieron

presentes. Un cronograma de guardias y recorridos por diferentes sectores del barrio fue uno de los logros. No obstante, con el correr de los meses, el modelo de vigilancia no fue eficaz para resolver el problema delictivo.

En el marco de un fuerte cuestionamiento vecinal por falta de seguridad en el barrio, desde la mesa de seguridad, vecinos y técnicos del municipio gestionaron ante el gobierno provincial (mediante un petitorio avalado por firmas) la instalación permanente de un destacamento policial en el barrio. Esta actividad posibilitó crear hacia el año 2006 la Comisaría XI, que instaló su sede en un predio destinado inicialmente a una guardería. Sin embargo, esta acción puede ser entendida como un programa de seguridad pública local orientada a la estricta vigilancia de los barrios pobres (Pinheiro; 1994).

A pesar de que la vigilancia nocturna se incremento, a juicio de los vecinos no atenuó satisfactoriamente el problema delictivo en el barrio. En las mesas, policías argumentaron que “a los menores que cometen delitos se los detiene pero no se los puede encarcelar” (Notas de campo). En la mayoría de los casos, los jóvenes apresados son liberados más tarde y el problema reflota. Por otro lado, los hechos delictivos se vieron agravados por la emergencia del vandalismo juvenil en las tres escuelas del barrio. A pesar de que las aulas fueron provistas de elementos de seguridad, (rejas en las aberturas exteriores), de manera recurrente se registraron rupturas, robos y saqueos. Esta situación alertó tanto a directivos de las escuelas como a maestros y profesores, que efectuaron denuncias y llevaron los problemas a las mesas. Las alternativas de solución fueron debatidas en sucesivas reuniones.

El análisis de estos procesos organizativos gestados hacia el interior del conjunto habitacional, son enriquecidos a partir del concepto de capital social; en tanto refiere



a la capacidad de las personas de actuar en común y participar en grupos y organizaciones guiadas por normas de reciprocidad e intercambio, basados en la confianza mutua (Vicherat y Serrano; 2000). Las iniciativas vecinales, en este sentido, ofician espacios para el desarrollo de la asociatividad y modos específicos de capital social. En suma, cierta clase de redes sociales facilitan, por sí mismas, la resolución de los dilemas de la acción colectiva (Putnam, 1995). La gestión asociada es una forma de acción colectiva, en tanto es el resultado de un proceso de construcción de significados y prácticas colectivas, en donde los actores se encuentran en intereses. Así a través de la acción colectiva, “los individuos interactúan, se influyen recíprocamente, y negocian, para definirse como actor colectivo y para delimitar el ámbito de su acción” (Melucci; 1999: 32).

A pesar de los intentos, la consolidación del espacio de las mesas de seguridad estuvo constantemente sujeta a diversas estrategias de convocatoria de la población local. En ese proceso, tanto los actores gubernamentales como vecinos han jugado un papel importante al instrumentalizar los medios más idóneos para convocar a maestros, policías y otros vecinos de diferentes sectores del conjunto habitacional. En ese proceso, la concurrencia y participación ha atravesado por cierto altibajo; no obstante, algunos logros se han alcanzado.

En el espacio interactorial de las mesas se pusieron en juego diferentes saberes y concepciones sobre el delito y su prevención. El saber del sector técnico/gubernamental no es más válido que el saber popular. Al asistir a un espacio de reunión/deliberación, los vecinos se sitúan ante la posibilidad abierta de involucrarse, participar, disentir, hablar, evaluar, proponer y conocer. Los actores en asociación construyen decisiones, planificando maneras compartidas de transformar la realidad. Aunque la deliberación con frecuencia conlleva a incertidumbre,

en términos de avances y retrocesos en los acuerdos y negociaciones logrados por los actores<sup>7</sup>.

Puede interpretarse que en el espacio de las mesas se discuten y deliberan acciones que se traducen en *políticas que atiendan el habitar*. Así, entre los vecinos el hecho de cuestionar la existencia de una problemática concreta a nivel barrial significa, en el fondo, discutir una política que bien ha generado ese problema o bien una política que potencialmente puede solucionarla (Brites; 2008: 110).

En este sentido, las mesas han oficiado como un espacio para debatir e idear estrategias colectivas contra la inseguridad y el delito. Así, más allá de la vigilancia y del patrullaje policial en el barrio, se habló de la necesidad de una policía comunitaria y de un modelo de prevención del delito y del vandalismo juvenil. Ese modelo de seguridad comunitaria involucraría no sólo a la Policía, sino a profesores, líderes barriales, vecinos etc. De este proceso surgieron diferentes acciones: charlas preventivas en las escuelas, campañas contra la violencia, talleres culturales para jóvenes, etc. En conjunto aquellas acciones evidenciaron la constitución de un nuevo saber-hacer. Como señala Poggiese (2000: 29): “saber-hacer es un compuesto de saber y de hacer, que se potencia en su *continuum*. Se conoce de una manera nueva y por eso se actúa de una manera nueva, o viceversa, porque se actúa de una forma nueva, se puede conocer de otro modo”.

La *hipótesis* es que en el escenario asociativo, los actores participan desde un acervo cultural de saber, pero mediante esa participación no sólo se reproducen saberes existentes, sino que se transforman

7 La necesidad de trabajar colectivamente para resolver problemas comunes lleva a minimizar la emergencia de conflictos y priorizar el consenso. Un consenso que es construido sobre la base del conflicto, a partir de negociaciones y acuerdos.



y se crean nuevas prácticas de participación comunitaria en la que interviene el diálogo, el intercambio de saberes y el consenso.

La participación asociativa, en la que además se aprende, supone que todas las personas poseen la capacidad de comunicarse para generar acciones (Habermas; 1989), lo que posibilita agencia y capacidad transformadora. Este saber compartido es también conceptualizado a través de la noción de sinergia cognitiva (Boisier; 2004). Es decir, un proceso que alimenta una interacción social direccionada a resolver problemas. En el marco de este proceso la “interpretación recíproca” es central, sobre ella se pueden negociar diversas definiciones de la situación. Así, a partir de la acción comunicativa los actores buscan entenderse sobre una situación para poder coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones (Habermas; 1989: 122).

En este sentido, la acción colectiva barrial, expresada a partir de las mesas, no se desarrolló de manera homogénea, su constitución se ha caracterizado por ser dinámica y cambiante. Los reclamos, las cuestiones dirimidas, las características de los actores protagonistas y hasta la coyuntura en la que se desarrollan, delinean situaciones que inciden en las formas en que se ha manifestado el actuar colectivo para resolver los problemas del hábitat en general y el problema delincriminal en particular.

## Conclusiones

Más allá de logros visualizados como alcanzados o no, el conjunto de situaciones aquí resumidamente analizadas, señala que el escenario interactorial constituido despertó procesos organizativos desde los que se gestaron saberes y diversas acciones colectivas para paliar la delincuencia barrial. Ello dejó instalado una serie de prácticas como una alternativa válida, en la búsqueda de un modelo de seguridad barrial.

La experiencia del conjunto habitacional A-4 evidencia que el mejoramiento, al menos gradual, de los problemas del vandalismo juvenil estuvo relacionado con la capacidad vecinal para abrir procesos deliberativos, construir capital social y crear espacios participativos. El conjunto de estas situaciones, de alguna manera ha sentado bases para procesos organizativos, desde los que se gestaron prácticas y acciones para paliar y prevenir la delincuencia en un ámbito socio-espacial segregado.

A pesar de los constreñimientos estructurales, la población relocalizada no está inmersa en un mundo estático, determinado por múltiples problemas, sino que los vecinos están frente a la posibilidad abierta de intervenir sobre sus lugares de vida, a partir de su capacidad activa y colectiva. La compleja naturaleza de la emergencia de nuevos problemas, la expansión del barrio, la llegada de nuevos actores, el liderazgo, el poder, las cuestiones organizativas, y otras tantas engendran la posibilidad de modificar/mejorar la calidad del hábitat barrial.

En fin, el escenario de las mesas no sólo ha sido un espacio para el tratamiento de problemas y búsqueda de un modelo colectivo de solución, sino también un espacio de sinergias, estrategias conjuntas y poder compartido. De manera que las mesas interactoriales de gestión asociada, no sólo han representado una movilización de diversos actores con voluntad política para generar un modelo de seguridad comunitaria, sino también un proceso de aprendizaje colectivo para sortear los problemas cotidianos. □

## Bibliografía

- Berrío Puerta Ayder. 2006. "La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci". En *Estudios Políticos* N° 29. Medellín. pp. 219-236.
- Boisier, Sergio, 2004, "Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente". En *Eure Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales*. Año/vol. 30 número 90. Pontifica Universidad Católica de Chile. Santiago. pp. 27-40.
- Brites Walter, 2008. "Políticas habitacionales sin componentes sociales. El caso del complejo Itaembé Miní de la ciudad de Posadas". En *Revista Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura y Sociedad* N° 7. Ed. Nobuco/EUDENE. Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia Argentina. pp. 93-114.
- Carrión Fernando, 2002 "De la violencia urbana a la convivencia ciudadana", en Fernando Carrión compilador, *Seguridad Ciudadana ¿espejismo o realidad?* OPS/OMS, FLACSO, Ecuador. Quito.
- Castel Robert 2000. *La metamorfosis de la cuestión social*. Paidós, Buenos Aires.
- Castel Robert, 2004 *La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?* Manantial. Buenos Aires.
- Habermas, Jürgen, 1989, *Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y Estudios previos*. Cátedra, Madrid.
- Melucci, Alberto. 1999. *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. El colegio de México. Centro de Estudios Sociológicos. México.
- Pinheiro, Paulo 1994, "Reflection on Urban Violence". En *The Urban Age*, Vol 1, Número. 4.
- Poggiese, Héctor, Elena Redín; Patricia Alí, 1999 "El papel de las redes en el desarrollo local como prácticas asociadas entre estado y sociedad". En Daniel. Filmus compilador. *Los Noventa*, Ed. Eudeba, Buenos Aires.
- Poggiese, Héctor 2000. "Movimientos sociales, formulación de políticas y redes mixtas socio-gubernamentales para un nuevo "saber-hacer" en la gestión de la ciudad". En *Desarrollo urbano: viejo tema o exigencia del presente*. Ediciones CLACSO. Buenos Aires.
- Putnam, Robert. 1995. "Bowling alone: America's declining social capital", En *Journal of Democracy*, Johns Hopkins University Press, U.S.A
- Vicherat, Daniela, y Claudia Serrano, 2000. *¿Qué motiva a la gente a actuar en común?* Estudio sobre participación social en la población malaquias concha comuna de la granja. Documentos de trabajo. CIEPLAN. Chile.
- Villasante Tomás. 1997. *Participación e integración social*. Disponible en <http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a016.html>. (Consultado 28 de junio 2007).
- Wacquant, Loïc 2000, *Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*. Manantial. Buenos Aires.
- PARR, Programa de Acción para el Reasentamiento y Rehabilitación 1999. Informe N° 3. Sector Urbano. Entidad Binacional Yacyretá. Posadas, Argentina.